



Informe anual 2007

AFRICA

Despreciar a los periodistas, y a los tratados firmados, ha sido una constante en 2006 en muchos Estados africanos. Gobernar con desprecio y represión es, especialmente desde 2001, una costumbre de las autoridades de Eritrea, que mantienen al menos a 17 periodistas en secreto, en una de las espantosas cárceles diseminadas por el país. Después de que algunas informaciones fiables dieran cuenta de la probable muerte de tres de ellos, la reacción de las autoridades de uno de los países más cerrados del mundo fue lacónica: "No hay comentarios". Son muchos quienes, entre los últimos periodistas que quedan sin ser detenidos, han intentado huir de un país por el que algunos habían luchado en la guerra de independencia, y que ahora les trata como a enemigos. En la vecina Etiopía, una veintena de directores de periódicos, y sus redactores jefe, continúan encarcelados y acusados de "alta traición", tras apoyar la contestación de los resultados de las elecciones de mayo de 2005, junto a la oposición. Ni el clamor internacional, ni las protestas de sus aliados occidentales, han conseguido doblegar al gobierno del Primer Ministro Meles Zenawi, que intensificó las declaraciones desdeñosas sobre los presos. Entre ellos, hay una mujer encinta que dio a luz un niño en la enfermería de la cárcel. En Somalia, los periodistas fueron molestos testigos de una guerra hecha de desinformación y mentiras. Se vieron detenidos, golpeados o asesinados sin miramientos. Con todo, los tribunales islámicos y el gobierno de transición se han atrevido a presumir de respetar la libertad de prensa, a pesar de dar un trato particularmente brutal a los medios de comunicación, con un desprecio que nada ha sido capaz de quebrantar.

Incluso en Kenia, la gran democracia del Este de Africa, un periódico fue el blanco del desprecio de un gobierno acorralado, teniendo que sufrir una espectacular irrupción de la policía y las declaraciones hostiles de varios oficiales. En Uganda, al comienzo del año, el gobierno de Yoweri Museveni mantuvo un estricto control informativo durante el período electoral, llegando incluso a expulsar a un corresponsal extranjero que, está claro, no podía ser otra cosa que un "peligro para el Estado". Fue también el desprecio por la información lo que llevó al gobierno de Sudán a acusar, por dos veces, de espías a algunos periodistas extranjeros que investigaban las masacres de Darfour. Rehénos durante algunas semanas de un Estado presionado por la comunidad internacional, solo les pusieron en libertad tras negociaciones políticas, demostrando la falta de peso de las acusaciones. Finalmente, Zimbabue sigue siendo uno de los países en que resulta extremadamente penosa la profesión de periodista. Porque, no contento con exigir que todos los profesionales estén registrados, fichados y vigilados por una comisión orweliana, el gobierno zimbabuense intenta por todos los medios silenciar a los medios de comunicación que no le cantan loas.

A veces, como en Tchad, la libertad de prensa es un logro que el gobierno no duda en cuestionar, cuando considera que esta en juego la seguridad nacional. Los patrones de la prensa tchadiana, teniendo que enfrentarse a movimientos rebeldes poco inclinados a la transparencia, también se ven obligados, a causa del estado de excepción, a publicar los periódicos cruzados de franjas negras que les impone la oficina de censura, según el leal entender de algunos funcionarios obedientes.

A veces, el desprecio se manifiesta en el poco caso que prestan a la prensa quienes detentan el poder político, o económico. Así, el período electoral fue muy difícil para la prensa de la República Democrática del Congo, ya afectada en el pasado por una legislación aberrante, aplicada con celo por una policía y una justicia gangrenadas por la corrupción. Hay que decir que algunos periodistas de Kinshasa no están exentos de reproches, cuando se pliegan servilmente a las órdenes de algunos generosos donantes preocupados por salpicar a sus adversarios, o cuando se transforman en soldaditos de los tenores de la política. Manipulable o vulnerable, el reportero es una presa fácil para los políticos ávidos de poder. Esta triste evidencia fue, también en 2006, la regla en Nigeria donde la policía, los servicios de inteligencia o, de manera general todos cuantos llevan uniforme, probaron un maligno placer al atacar físicamente a los periodistas que no les gustaban.

UNA IMPUNIDAD QUE PERSISTE

Por decimosegundo año consecutivo, en el oeste del continente, el presidente de la minúscula Gambia Yahya Jammeh, continuó tratando a los periodistas con una agresiva condescendencia. Sus todopoderosos servicios de inteligencia detuvieron y maltrataron al menos a diez periodistas, cerraron *manu militari* dos periódicos y amenazaron a todos quienes, de cerca o de lejos, estorbaron a su jefe absoluto, el Presidente de la República. Se trata simplemente de humillaciones suplementarias para la prensa gambiana, que está obligada a vivir y trabajar con el recuerdo del asesinato, que permanece impune, de su decano Dayda Hydara, al que mataron en dudosas circunstancias en 2004. En Burkina Faso hace ocho años que los periodistas llevan luto por Norbert Zongo, asesinado junto con tres compañeros en 1998.

Mientras que numerosos elementos acusan a la guardia presidencial y al hermano del Jefe del Estado, François Comaporé, la justicia burkinesa, claramente influenciada, se atrevió en pleno verano, y casi a escondidas, a sobreseer al principal sospechoso, dejando constancia de la indiferencia de las autoridades ante la sed de justicia de la familia del periodista. En Costa de Marfil, los profesionales de los medios de comunicación que optaron por no alinearse con ninguno de los beligerantes, fueron sus blancos predilectos. En enero, y por segunda vez en dos años, los "Jóvenes Patriotas" atacaron los medios de comunicación públicos, para sostener y organizar sus motines en las calles de Abidján. Por intentar hacer de la radiotelevisión pública un ejemplo de servicio público, al periodista Kebe Yacouba le llenaron de insultos y amenazas, antes de que le despidiera brutalmente el presidente Laurent Gbagbo. La familia del periodista franco-canadiense Guy-André Kieffer, secuestrado en Abidján en 2004 y desaparecido desde entonces, vive en medio de este clima particularmente poco propicio para que avance la investigación de la justicia francesa.

Los gobiernos que a sabiendas mantienen en sus legislaciones penas de cárcel para los delitos de prensa pueden manifestar a su antojo el desprecio que sienten por los profesionales de la información. El fácil pretexto de la "responsabilidad" de los medios de comunicación, en el caso de que alguna vez se utilice de buena fe, ha enviado a la celda a más de un periodista, al acercarse a cuestionar la integridad de los poderosos. El ejemplo más sorprendente de esa desproporcionada lucha entre un periódico y un gobierno ocurrió este año en Níger, cuando el director y el redactor jefe de un periódico de oposición pasaron más de cuatro meses en la cárcel, por criticar la política del Primer Ministro. Cuando algunos gobiernos, secundados por la policía, la justicia y la administración penitenciaria, atacan a los periodistas, la lucha es desigual. En Burundi, en 2006, el jefe del partido presidencial Hussein Radjabu, un personaje poderoso y controvertido, no ocultó que detesta a las radios privadas, culpables según él de criticar sus abusos y las manipulaciones que ha instigado. Varios periodistas optaron por marcharse del país, para ponerse a buen resguardo. En cambio, cuatro profesionales de los medios de comunicación no tuvieron tiempo de darse cuenta de que, de la hostilidad verbal, las autoridades iban a pasar a la acción. En consecuencia, pasaron varios meses en la cárcel, antes de salir en libertad.

Sin embargo, la mayoría de estos países han firmado multitud de tratados, garantizado las libertades civiles y políticas. Casi todos asientan su poder en Constituciones que protegen la libertad de expresión. Pero, como en Guinea Ecuatorial o en el reino de Swazilandia, donde al jefe del Estado se le considera un semidios, esos compromisos tienen poco valor para los gobiernos que manifiestamente desprecian, no solo a los periodistas, sino incluso a su firma.

POCAS PROMESAS CUMPLIDAS

Por todas estas razones, Reporteros sin Fronteras no puede más que sentirse satisfecha al comprobar que un gobierno africano ha mantenido sus promesas. La Junta Militar de Mauritania, en el poder desde 2005, se comprometió a garantizar la libertad de prensa, reformar su legislación, respetar el equilibrio de las fuerzas políticas en periodo electoral, liberar a la prensa pública de una presión excesiva del ejecutivo y tratar a la prensa independiente como colaboradora en el desarrollo. Y lo hizo en 2006.

Y sin embargo no hay que pensar que el continente africano es solo un ensamblaje de tiranías o democracias aproximativas. Especialmente en la zona de influencia de Sudáfrica, Namibia y Botsuana garantizan una libertad de prensa satisfactoria, llena de lagunas pero relativamente comparable a la que existe en las democracias occidentales. Lo mismo ocurre en las islas o los archipiélagos africanos, como Mauricio, Sao Tomé y Príncipe o Cabo Verde, que parecen remansos de libertad a lo largo de un continente atormentado. También las Comoras están saliendo, poco a poco, de los años de plomo. Y es también el caso de Mozambique donde, y se trata de un hecho lo suficientemente raro en Africa como para subrayarlo, les ha caído una grave condena a los asesinos del periodista Carlos Cardoso, al que mataron en 2000 cuando investigaba un escándalo económico de gran envergadura.

La mejor arma para luchar contra el desprecio es la paciencia. En Africa, los gobiernos que desprecian a los periodistas, o que no conceden ningún valor a los compromisos adquiridos, viven a la defensiva. Su poder acaba por pulverizarse. Los apoyos escasean. Los golpes son cada vez más dolorosos. Las dictaduras terminan por caer, los periodistas por salir de la cárcel. Por eso, para dejar que respire un país que se ahoga, lo más urgente es devolver su libertad a la prensa.

Léonard Vincent
Responsable del despacho Africa



ERITREA

Superficie : 117.600 km².
Población : 4.401.000.
Idioma : tigríno.
Jefe del Estado : Issaias Afeworki.

El país más joven de África, independiente desde 1993, es una cárcel a cielo abierto custodiada por un partido único ultranacionalista, que en la menor reivindicación democrática ve un atentado a la seguridad nacional. Entre los centenares de detenidos políticos, al menos trece periodistas acaban de pasar su sexto año de cárcel. Tres de ellos podrían haber sucumbido a unas condiciones de detención comparables a las que se daban en los presidios de galeras.

En Eritrea ha transcurrido el quinto año de terror y silencio. En este pequeño país arrinconado entre Etiopía, Sudán y el Mar Rojo, independiente solo desde 1993, el Estado Mayor del ejército y el partido único, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ), han continuado controlándolo todo y castigando con dureza la menor veleidad crítica.

Bajo la batuta del Ministro de Información, Alí Abdou, los medios de comunicación estatales han continuado entonando loas al presidente Isaias Afeworki. Los periodistas que están en desacuerdo con el autoritarismo de los jefes de esa cárcel a cielo abierto no tienen más opción que obedecer las órdenes. Cuando la presión se hace demasiado fuerte huyen. Así, en 2006 escaparon al extranjero una decena, y entre ellos Temesghen Debesai, el presentador estrella del servicio inglés del canal público *Eri-TV*. Por su parte, Aklilu Solomon, ex corresponsal de la emisora pública norteamericana *Voice of America (VOA)*, pasó clandestinamente la frontera etíope en los primeros días de diciembre. En julio de 2003 le detuvieron por realizar un reportaje sobre la tristeza de las familias de los soldados al saber que uno de ellos había muerto en combate. Liberado, dieciocho meses más tarde, del contenedor metálico en que le tuvieron recluido, este periodista de frágil salud pasó después varias semanas en un cuartel, para que perfeccionara su "reeducación patriótica".

ASUMIDO EL DESPRECIO A LA PRENSA

A las repetidas defecciones el gobierno eritreo ha respondido en su forma habitual; es decir, reprimiendo. A partir del 12 de noviembre, unos agentes de las fuerzas de seguridad se han presentado diariamente en los locales del Ministerio de Información, donde se encuentran los medios de comunicación públicos, y han detenido a algunos

empleados, sin explicaciones. Los periodistas detenidos en estas nuevas razzias son: Ahmed "Bahja" Idris, de *Eri-TV*; Senait Tesfay, presentadora del servicio en tigríno de *Eri-TV*; Paulos Kidane, del servicio en amárico de *Eri-TV* y de la emisora pública *Radio Dimtsi Hafash (Voice of the Broad Masses)*; Daniel Mussie, del servicio en oromo de *Radio Dimtsi Hafash*; Temesghen Abay, del servicio en tigríno de *Radio Dimtsi Hafash*; Yemane Haile, de la agencia gubernamental *Eritrean News Agency (ENA)*; Fathia Khaled, presentadora del servicio en árabe de *Eri-TV* y Amir Ibrahim, periodista del servicio en árabe de *Eri-TV*, que es diabético. Estarían detenidos en la capital, Asmara, en un complejo gestionado por la policía y conocido como "Agip", en referencia a la compañía petrolera que en el pasado estaba instalada en ese lugar. Ese centro de detención es el lugar "donde la policía lleva a los presos para torturarles, antes de trasladarles a su destino final", según un antiguo detenido interrogado por Reporteros sin Fronteras.

DETENIDOS EN CONDICIONES INHUMANAS

Pero todo parece indicar también que, en uno de los muchos centros de detención del país, ha ocurrido algo irreparable. A finales del año 2006, informaciones creíbles anunciaron la muerte, en el presidio de Eiraeiro, de tres de los trece periodistas detenidos en secreto desde hace cinco años. Said Abdulkader, Medhane Haile y Yusuf Mohamed Alí formaban parte de los periodistas y opositores con los que arramblaron en la semana del 18 al 23 de septiembre de 2001, cuando sobre la marcha el presidente Isaias Afeworki "suspendió" los medios de comunicación privados, y detuvieron al ala reformista del partido en el poder. El gobierno eritreo, contactado por Reporteros sin Fronteras y por varios medios de comunicación internacionales en relación con esta información, dio una res-



ERITREA

puesta lacónica: "No estamos dispuestos a hacer comentarios". Los fallecimientos podrían deberse a las penosas condiciones de detención que existen en Eiraeiro.

En el informe que incluía esa información se mencionaban otros presos. Se trataba de Seyoum Tsehaye (o Fsehaye), periodista freelance; Dawit Habtemichael, redactor jefe adjunto y cofundador de *Meqaleh*; Temesghen Gebreyesus, periodista y miembro del consejo de administración de *Keste Debera* y Emanuel Asrat, redactor jefe de *Zemen*. Todos ellos estarían internados en esa cárcel

extremadamente agotadora, gestionada por el ejército y situada en pleno desierto, en una provincia del noreste.

Finalmente, Reporteros sin Fronteras ha tenido noticias de Fessehaye Yohannes, apodado "Joshua", cofundador de *Setit*, el semanario más leído antes de 2001. Ahora estaría encerrado en la celda nº 18 de la cárcel de Eiraeiro, tras haber pasado por la penitenciaría de Dongolo (Sur), en una pieza subterránea de 1,5 metros de lado por 2,50 metros de alto, iluminada por una bombilla encendida las 24 horas del día.



ETIOPÍA

Superficie : 1.104.300 km².

Población : 77.431.000.

Idioma : amarico.

Jefe del gobierno : Méles Zenawi.

La comunidad internacional pudo creer que las elecciones legislativas de mayo de 2005 iban a significar el final de la "democracia autoritaria", y la llegada de una "apertura real". Pero el fiasco de las votaciones, y las subsiguientes revueltas, arruinaron esa esperanza. Una quincena de periodistas están encarcelados desde noviembre de 2005, atrapados en las razzias de la coalición de oposición.

Tras un año desastroso, 2006 ha sido para Etiopía el del inmovilismo. Una veintena de periodistas lo han pasado en sus celdas de Addis Abeba. Forman parte del grupo de al menos 76 miembros de la oposición, la sociedad civil y la prensa, perseguidos por "traición", "conspiración" para derrocar al gobierno y "genocidio". Su juicio ante el Alto Tribunal Federal se inició el 2 de mayo. La reprobación general, incluida la de los tradicionales aliados de Etiopía, no consiguió doblegar al Primer Ministro Meles Zenawi. Para él, no existen dudas. La oposición quiso provocar un golpe de Estado y vengarse de quienes, como él, forman parte de la etnia tigrina.

En noviembre de 2005, en el espacio de un mes detuvieron a catorce directores de periódicos, o redactores jefe. A partir de diciembre de 2005 detuvieron y condenaron a otros periodistas, por asuntos de difamación. El 1 de enero de 2007 todos ellos continuaban detenidos.

UN CLIMA SIEMPRE HOSTIL

Después del 1 de enero de 2006 otros periodistas se sumaron a los "presos de noviembre". Solomon Aregawi, de *Hadar*, detenido en noviembre de 2005, fue inculcado el 21 de marzo de 2006 de "desacato a la Constitución" y "genocidio", junto a otros 32 presos, miembros reales o supuestos del CUD, principal coalición de oposición. Detenido el 19 de febrero, Goshu Moges, del semanario *Lisane Hezeb*, fue inculcado de "traición" el 19 de abril. Un determinado número de periodistas y miembros de la oposición, o de asociaciones, fueron inculcados mientras se encontraban fuera del territorio etíope, y juzgados por rebeldía.

En este clima de tensión, agravado por la guerra con Somalia y el statu quo en la frontera eritrea, algunos periódicos privados siguen publicándose en Addis Abeba. La autocensura está a la orden del día, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones militares. Los periodistas etíopes hacen gala de un patriotismo impuesto y los corresponsales extranjeros están estrechamente vigilados. Así, por haber supuestamente "empañado la imagen de la nación", Anthony Mitchell, corresponsal de *Associated Press (AP)*, se vio obligado a marcharse del país el 22 de enero. A los medios de comunicación extranjeros les cuesta mucho conseguir una acreditación del Ministerio de Información, indispensable para quienes pretendan trabajar legalmente en territorio etíope.

Desde 2004, Reporteros sin Fronteras está también preocupada por la situación de Shiferraw Insermu y Dhabassa Wakjira, dos periodistas del servicio en oromo del canal público de televisión *ETV*. Les detuvieron en abril de ese año, junto a otros empleados de *ETV* hoy en libertad, como consecuencia de la violenta represión de una manifestación de estudiantes oromos en el campus de la universidad de Addis Abeba, el 4 de enero de 2004. Los dos periodistas están acusados de haber sido informadores del movimiento separatista Oromo Liberation Front (OLF).

Por primera vez en su historia, el gobierno etíope parece que se ha lanzado a la censura del Net. De mayo a junio de 2006 eran inaccesibles en el país la mayor parte de los blogs y sitios de oposición. El gobierno negó que el bloqueo fuera cosa suya. Sin embargo, a finales de noviembre, esas publicaciones digitales desaparecieron de nuevo misteriosamente, lo que hace plausible la hipótesis de que se trata de una censura política.

MAURITANIA

Superficie : 1.025.520 km².

Población : 3.069.000.

Idiomas : árabe, francés.

Jefe del Estado : Ely Ould Mohamed Vall.

En dos años, la libertad de prensa ha experimentado avances espectaculares en el antiguo "dominio privado" del depuesto presidente Maaouiya Ould Taya, hoy en el exilio. Tras su cese forzoso en agosto de 2005, una Junta Militar ha iniciado un proceso de transición democrática, que debe culminar con la elección presidencial en marzo de 2007. Entre las promesas que hasta ahora han mantenido los nuevos jefes del país se encuentra la abolición de la censura.

Si era necesaria una prueba de que la presión internacional acaba por dar resultados positivos en las libertades civiles y políticas, el caso de Mauritania es un instructivo ejemplo. Tras la "revolución de palacio" de agosto de 2005, la Junta Militar que destronó al presidente Maaouiya Ould Taya prometió restablecer la democracia y, entre otras cosas, la libertad de prensa. A final de 2006 seguía manteniendo su promesa.

Una comisión especializada, compuesta por periodistas independientes de Nouakchott, juristas y altos funcionarios, en colaboración con Reporteros sin Fronteras, ha elaborado una nueva ley que despenaliza los delitos de prensa, e introduce mecanismos de regulación democrática. Finalizada en marzo, y ligeramente enmendada por la profesión tras ser presentada en público, el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD) promulgó la nueva legislación a principios de octubre. Por tanto, se ha abolido la censura mediante una negociación, y con el apoyo de la comunidad internacional. La regulación del sector ha quedado encomendada a una Alta Autoridad de la Prensa y el Audiovisual (HAPA). Y, finalmente, los periodistas mauritanos pueden respirar después de veinte años de opresión, vigilancia permanente y autoritarismo policial.

Cierto que el paisaje audiovisual continúa en manos del Estado, y que las promesas de liberalización del CMJD tardan en concretarse. Pero los principales medios de comunicación públicos se han puesto en manos de periodistas responsables, que han abierto sus páginas, y sus micrófonos, al conjunto de las sensibilidades políticas del país. Así, el referéndum constitucional de junio, y las elecciones municipales y legislativas de noviembre, se llevaron a cabo en buenas condiciones, garantizando la diversidad del uso público de la palabra y

el acceso de la mayoría al conjunto del discurso. Como la elección presidencial prevista para marzo de 2007, esas votaciones dieron lugar a concertaciones previas entre el gobierno y los movimientos políticos, para contentar a todo el mundo, incluidos los movimientos más radicales. Además se ha restablecido la difusión en la capital de la emisora pública francesa *Radio France Internationale* (RFI), suspendida por el antiguo régimen en noviembre de 2000, y se han iniciado negociaciones con la dirección del canal para extenderla a Nouadhibou (Oeste).

NUEVOS OBJETIVOS

Sin embargo, son muchos los desafíos que esperan a los periodistas mauritanos, entre otras cosas para franquear algunas presiones de los clanes o las tribus. Así, Khalil Ould Jdoud, redactor jefe del diario arabófono *Al Akhbar*, fue agredido el 15 de febrero de 2006 en Nouakchott. Una decena de hombres armados, a las órdenes del ex coronel Mohamed Mahmoud Ould Deh, uno de los hombres influyentes del antiguo régimen reconvertido en negociante, irrumpieron en los locales del periódico buscándole. El mismo día, el coche en que circulaba el periodista colisionó con un vehículo todo terreno en el centro de la capital. Tras conseguir huir sin que le hirieran, presentó una denuncia e inmediatamente se pasó a la clandestinidad, temiendo por su seguridad. La intervención del gobierno permitió castigar a los culpables y, por razones que aún permanecen oscuras, el periodista optó por retirar la denuncia.

Por otra parte, continúa planteando problemas el fenómeno de la prensa "peshmerga" - esas publicaciones irregulares, de dudosa profesionalidad y favorecidas por el antiguo régimen, para descalificar a la prensa independiente. Los responsables de

MAURITANIA

esos periódicos, cazadores de “regalitos” y ávidos por ofrecer sus servicios a los mejores postores, continúan siendo invitados a las conferencias de prensa y a los eventos oficiales, provocando la rabia de los periodistas comprometidos en el respeto de las reglas deontológicas de su profesión.

“Ya nos enfrentamos a autoridades políticas que disfrutaban de todos los poderes. No veo por

qué íbamos a desinflarnos ante otros. La única amenaza que ahora pesa sobre la prensa solo puede venir de ella misma. Tiene que organizarse, profesionalizarse, unirse, dar muestras de solidaridad, para enfrentarse a estos nuevos predadores”, dijo a Reporteros sin Fronteras Ahmed Ould Cheikh, director de publicación de *Calame*, uno de los periódicos más censurados antes de 2005.



NIGERIA

Superficie : 923.770 km².
Población : 131.530.000.
Idioma : inglés.
Jefe del Estado : Olusegun Obasanjo.

Los periodistas del "gigante del Oeste de África", primer productor de petróleo del continente, se tambalean entre la violencia social, la corrupción endémica y la agresividad de algunos políticos, dispuestos a todo con tal de mantener sus privilegios. Palizas, detenciones, procesos abusivos y amenazas de muerte forman parte del panorama cotidiano de los profesionales de los medios de comunicación de Lagos y de las diferentes capitales de los Estados, donde poderosos gobernadores imponen su ley.

Para los periodistas nigerianos 2006 fue, una vez más, un año de sufrimiento. Tuvieron que enfrentarse a la brutalidad policial, algunos a detenciones por el menor artículo que disgustara a las autoridades locales, y a la corrupción de los hombres uniformados, los barones de la política y los empresarios. Es cierto que la prensa nigeriana es pluralista, vigorosa e insolente, fuerte por el apoyo de la población y de una larga tradición de resistencia a las diferentes juntas militares y dictaduras, que han sangrado el país desde su independencia. Pero, como Reporteros sin Fronteras subrayaba en marzo tras haber tenido conocimiento, en un mes, de tres agresiones físicas, una orden de censura, un despido abusivo, una detención arbitraria y un caso de intimidación, "los periodistas padecen la violencia cotidiana que impera en Nigeria". Pero con frecuencia también son los cabeza de turco de poderosos, militares, gobernadores, ministros o empresarios, que disfrutan de una impunidad total y no sienten ningún respeto por el derecho a la información. Por eso hay que rendir un homenaje especial a los periodistas nigerianos que han soportado la opresión de juntas militares, y que ahora trabajan desafiando el desprecio y la brutalidad de las autoridades, y sus protegidos.

En un país donde con frecuencia la lucha por el poder se establece sobre un fondo de violencia y corrupción, los periodistas son blancos escogidos. Imo Eze, director del periódico *Ebonyi Voice*, y el periodista de su publicación Oluwole Elenyinnmile, pasaron más de dos meses en la cárcel, entre el 14 de junio y el 25 de agosto, tras publicar el 16 de abril un artículo titulado "Is Ebonyi A Failed State?" ("¿El Estado de Ebonyi está en quiebra?"). Un tribunal de Abakaliki, capital del Estado de Ebonyi, les acusó de "conspiración", "sedición" y "difamación" contra el gobernador, Sam Ominyin Egwu.

UNA TELEVISIÓN EN EL PUNTO DE MIRA

El gobierno también utilizó procedimientos judiciales abusivos con algunos periodistas que cuestionaron al presidente, Olusegun Obasanjo. Así, Mike Gbenga Aruleba, presentador de una famosa emisión política, y Rotimi Durojaiye, reportero del *Daily Independent*, pasaron dos días en la cárcel y se les inculpó de "sedición", en aplicación de una ley que sin embargo carece de efecto desde que lo decidió un tribunal de apelación en 1983. En el *Daily Independent* del 12 de junio, Rotimi Durojaiye publicó un artículo titulado "Controversy Over Age, Cost of Presidential Jet" ("Polémica en torno a la edad y el coste del avión presidencial"), en el que el periodista se interrogaba acerca de las modalidades y la oportunidad de la adquisición del nuevo avión presidencial. En el programa "Focus Nigeria", emitido al día siguiente por el canal de televisión *African Independent Television (AIT)*, el presentador Mike Gbenga Aruleba se refirió a su vez a ese asunto, que había suscitado gran controversia en la prensa nigeriana. Por emplear una palabra peyorativa ("tokunbo"), sugiriendo que se trataba de un aparato de segunda mano, unos agentes del State Security Service (SSS, servicios interiores de inteligencia) detuvieron el 14 de junio a Mike Gbenga Aruleba ; le pusieron en libertad al día siguiente, con la condición de que notificara sus desplazamientos. En cuanto a Rotimi Durojaiye, le detuvieron el 25 de junio. Al día siguiente detuvieron de nuevo a Mike Gbenga Aruleba cuando, por razones de trabajo, se había marchado de Abuja a Lagos. El 10 de octubre le pusieron en libertad. En cuanto al juicio de Rotimi Durojaiye, ha quedado aplazado.

El canal de televisión *AIT* ya tuvo problemas con las autoridades, el mes anterior. El 14 de mayo,



NIGERIA

unos agentes del SSS irrumpieron en sus locales y embargaron la cassette de un documental, que hablaba de los intentos fallidos de anteriores dirigentes nigerianos por mantenerse en el poder. *AIT*, el más antiguo de los canales privados del país, estaba en el punto de mira de las autoridades desde que emitió en directo los debates de la Asamblea Nacional sobre una controvertida enmienda a la Constitución de 1999, presentada por los partidarios del presidente Obasanjo y que, entre otras cosas, habría permitido que el Presidente de la República, y los gobernadores de los Estados federados, se mantuvieran cuatro años más en el poder. Pocos días después de la razzia, el Parlamento rechazó la enmienda. Reporteros sin Fronteras ha metido en su lista de "Predadores de la libertad de prensa" al SSS, habituado a efectuar operaciones de comando contra la prensa privada.

DOS PERIODISTAS MUERTOS

Como si ese clima de permanente hostilidad no pesara ya suficientemente sobre la prensa nigeriana, el final del año estuvo marcado por dos asesinatos. Ambas víctimas era periodistas famoso en Lagos y las circunstancias de su muerte, aunque no hay nada que pruebe que esté relacionada con su actividad profesional, ponen de manifiesto el universo de violencia con que tienen que convivir los profesionales de los medios de comunicación. A Omololu Falobi, ex periodista del diario privado *The Punch*, fundador y director ejecutivo de la asociación *Jornalists Against AIDS* (Periodistas contra el SIDA, JAAIDS), le mataron el 5 de octu-

bre hacia las 22 horas, cuando acababa de salir de la sede de la asociación, situada en el barrio de Ogba, en Lagos. Los asesinos le hicieron varios disparos en la frente, cuando se encontraba al volante de su automóvil. Las primeras conclusiones de la investigación, facilitadas por JAAIDS y varios periodistas nigerianos, indican que a Omololu Falobi le mataron por razones crapulosas, pero no han detenido a ningún sospechoso.

Godwin Agbroko, presidente del directorio editorial del diario privado *This Day*, apareció muerto el 22 de diciembre, al volante de su automóvil, al borde de una carretera del barrio de Isolo, en Lagos, cuando acababa de marcharse de las oficinas del periódico. No le robaron sus efectos personales pero la misma noche, y en el mismo barrio, mataron a disparos a tres policías y dos videntes. La policía indicó que baraja la hipótesis de un homicidio, de carácter crapuloso. Sin embargo, su hijo Tobor Agbroko, dijo a la prensa nigeriana que su familia creía que se trataba de un asesinato. "Llevaba un teléfono que vale varios miles de nairas, y no lo tocaron. Tampoco se llevaron el dinero que llevaba, ni el reloj de pulsera, ni otros bienes". Rechazó la hipótesis sostenida por la policía, estimando que no "se puede pensar que las personas son imbéciles diciendo que los asesinos eran ladrones". Godwin Agbroko era un periodista conocido, que frecuentemente firmaba una crónica en *This Day*. Redactor jefe de varios periódicos durante la dictadura militar (1993-1999), continuó dando un tinte irónico y sin complacencia de la vida política.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Superficie : 2.344.860 km².

Población : 57.549.000.

Idioma : francés.

Jefe del Estado : Joseph Kabila.

En este país, tan grande como Europa occidental, la prensa se tambalea entre la violencia de los militantes políticos y sus jefes, la anarquía que impera en algunas regiones y la pobreza endémica que a veces le empuja a dejarse corromper. En 2006 se organizó la mayor misión de la ONU en todo el mundo, para supervisar una histórica elección presidencial. Aunque varios periodistas fueron víctimas de los odios políticos, otros jugaron un papel peligroso, que habría podido inclinar al país hacia la guerra civil.

La desmesura del territorio del antiguo Zaire es a la imagen de los problemas que tienen planteados los periodistas de este país. En Kinshasa, donde existe una prensa pletórica, polémica e indócil, son usuales las detenciones abusivas y la brutalidad policial. En 2006, y como en años anteriores, cerca de una quincena de directores de publicaciones, redactores jefes o periodistas que trabajan en la capital, fueron enviados a pudrirse en las siniestras celdas del Centro Penitenciario y de Reeducción de Kinshasa (CPRK), con frecuencia sobre la base de la simple denuncia de un político o un empresario, o de una llamada telefónica al jefe de la policía. Desde hace varios años, Reporteros sin Fronteras, y su organización colaboradora Periodista en Peligro (JED), vienen pidiendo al gobierno congoleño que reforma la ley de difamación, que establece penas de cárcel y permite la detención preventiva de periodistas. En vano, de momento. Las autoridades no han renunciado todavía a usar y abusar de un artículo que condena "la imputación perjudicial", sin que los jueces tengan que pronunciarse sobre la veracidad de las informaciones incriminadas sino solamente sobre el hecho de que "atenten, o no, al honor o a la consideración" del querellante. Dada, además, la corrupción existente en el sistema judicial, son frecuentes las injusticias.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARTIDARIOS

Ciertamente también existe un problema de corrupción en la prensa congoleña. Muchos periodistas venden las páginas de sus periódicos al mejor postor, poniéndose en situación de maestros cantores o portavoces de políticos poco escrupulosos. Por otra parte, con frecuencia aparecen manifestaciones de odio en las columnas, o en las ondas

de algunos medios de comunicación congoleños, instrumentados por clanes políticos o étnicos. La campaña de la elección presidencial de julio representó una ocasión para que los medios públicos y privados manifestaran ruidosamente sus preferencias por tal o cual candidato, a menudo sin tener para nada en cuenta la deontología. Por eso, los medios de comunicación partidarios, en particular los de Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba, fueron el blanco de los ataques de sus adversarios, que no dudaron en enviar a sus milicias, o a sus militantes, para silenciar la voz del "otro". Signo de los tiempos, el 20 de agosto, al día siguiente de la proclamación de los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, estallaron combates entre las guardias pretorianas de ambos candidatos finalistas, en torno al inmueble de las televisiones de Jean-Pierre Bemba. Un mes más tarde, el 18 de septiembre, un incendio de origen indeterminado destruyó los locales y los estudios de *Canal Congo Télévision (CCTV)*, *Canal Kin Télévision (CTV)* y *Radio Liberté Kinshasa*, causando quemaduras de segundo grado al director general de los canales, Stéphane Kitutu.

AMENAZAS Y ZONAS DE SOMBRAS

Otros muchos periodistas se esfuerzan en practicar honestamente su oficio, pero pagan un alto precio - su seguridad, su libertad o su vida - por molestar a quienes desvían el bien público. Uno de ellos, Kazadi Mukendi, periodista del semanario *Lubilanji Expansion*, pasó mes y medio en la cárcel por denunciar un caso de corrupción, a pesar de que el fiscal ordenó que le pusieran en libertad un mes y medio antes. En cuanto a Bapuwu Mwamba, editorialista de oposición que había regresado recientemente del exilio, fue asesinado el 8 de julio

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

en su domicilio, sin duda por algunos militares ávidos de dinero fácil.

Menos de un año antes, el periodista político Franck Ngyke y su esposa, Hélène Mpaka, fueron asesinados, en circunstancias todavía poco claras, en su domicilio de Kinshasa. Gracias a la presión de los periodistas congoleños y de organizaciones internacionales, y por primera vez en la historia reciente del país, se abrió una investigación para aclarar el doble homicidio que desembocó en el proceso, relativamente confuso, de tres presuntos culpables, tres ex militares con móviles muy vagos. Por su parte, la organización JED llevó a cabo una investigación independiente, destinada a explorar la pista política, a pesar del ostentoso desinterés de las autoridades por esa hipótesis. Todavía no se han confirmado, ni desmentido, sus conclusiones. Sin embargo, las repetidas amenazas de muerte recibidas por Donat M'Baya Tshimanga, presidente de la asociación, y Tshivis Tshivuadi, secretario general, parecen indicar que han molestado mucho las cuestiones reveladas en su investigación, y especialmente el papel jugado por algunas personas cercanas al Ministro del Interior.

Para hacer frente a todos estos desafíos, Reporteros sin Fronteras envió en marzo una delegación a Kinshasa, con el objetivo de entrevistarse con el presidente Joseph Kabila, varios ministros y embajadores, la misión local de la ONU y los responsables de los principales medios de comunicación. Aunque la organización pudo conseguir la libertad de tres periodistas que entonces estaban encarcelados, también pudo constatar la insuficiencia de mecanismos de regulación y autorregulación. La Alta Autoridad de los Medios de Comunicación (HAM), dirigida por el respetado periodista Modeste Mutinga, está sometida a tales presiones que le resulta muy difícil trabajar serenamente. Al tiempo que le es imposible no sancionar las derivas y los patinazos de los medios de propaganda, tiene que enfrentarse a

recurrentes acusaciones de "parcialidad". Y en ese contexto, unos partidarios de Jean-Pierre Bemba que regresaban de un mitin de su campeón, saquearon la sede social el 27 de julio.

HOSTILIDAD

Pero los militantes políticos no son los únicos que no respetan esa importante institución de las democracias modernas. El Ministro de Información, obligado por Henri Mova Sanakyi, "un "duro" del partido de Joseph Kabila, no ha dudado en obstruirla frecuentemente, y especialmente a finales de agosto cuando ordenó el corte salvaje de la emisión de los canales de Jean-Pierre Bemba. Por otra parte, a lo largo del año el ministro se ha distinguido varias veces por su falta de consideración con las reglas democráticas. El 3 de julio, por iniciativa suya expulsaron del país a Ghislaine Dupont, enviada especial de *RFI*. En los meses precedentes, el ministro la atacó violentamente y, en el diario kabilista *L'Avenir* se puso en marcha una peligrosa campaña de odio contra ella, con acento xenóforo.

La situación no es mucho mejor en las provincias, que en Kinshasa. Los potentados locales no dudan en enviar a sus secuaces a ajustar cuentas con los periodistas demasiado curiosos. El 18 de mayo, por ejemplo, a Ricky Nzuzi, camarógrafo de la *Radio Télévision Nationale Congoleña (RTNC)* en Lumumbashi, unos desconocidos le secuestraron, le dieron una paliza y le tiraron a una fosa por la noche. En las zonas donde causan estragos los ejércitos privados, con vagos objetivos políticos, los periodistas están totalmente inseguros. Acquitté Kisembo, colaborador de la *AFP*, se da por desaparecido desde 2003 en Ituri, y todo hace pensar que le asesinaron unos milicianos del sector. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras pidió al Tribunal Penal Internacional que ampliara la investigación sobre el señor de la guerra Thomas Lubanga, trasladado a La Haya en este año, en relación con esa inexplicada desaparición.



RUANDA

Superficie : 26.340 km².

Población : 9.038.000.

Idiomas : kinyarwanda, francés, inglés, suahili.

Jefe del Estado : Paul Kagamé.

Es cierto que se han superado grandes desafíos para reconstruir un país profundamente desgarrado por el genocidio de 1994. Pero, en él, la libertad de prensa no está en absoluto garantizada y los periodistas rwandeses tienen que sufrir permanentemente la hostilidad del gobierno y la vigilancia de los servicios de seguridad.

A Ruanda, un país profundamente magullado por el genocidio de los tutsis en 1994, le está costando mucho salir de sus años negros. Ciertamente se han reconstruido las infraestructuras del país y que se ha creado un sistema para juzgar a los "genocidas de barrio". Pero el presidente Paul Kagame y su gobierno no han aceptado nunca garantizar una real libertad de prensa. Y hacen que el precio más alto lo paguen los periodistas que les molestan, o que revelan los aspectos más sombríos de su política.

Por otra parte, el año 2006 comenzó con la agresión del director de uno de los pocos periódicos independientes que se publican en Kigali. A Bonaventure Bizumuremyi, director del semanario privado *Umuco*, le despertaron el 15 de enero, a las 3 de la madrugada, cuatro hombres armados con garrotes y cuchillos. Llamaron a la puerta de su domicilio, situado en un barrio popular de Kigali. Una vez dentro, saquearon la casa y le amenazaron, conminándole a dejar de publicar artículos desfavorables para el Frente Patriótico Rwandés (FPR, en el poder). Tras la intervención de los vecinos, los cuatro hombres abandonaron tranquilamente el domicilio del periodista. La víspera de esa violenta intrusión en su casa, a Bonaventure Bizumuremyi le siguió un vehículo policial hasta su domicilio. También había recibido amenazas por teléfono. En la última edición de *Umuco* había denunciado la falta de separación entre los poderes en Ruanda y criticado al FPR, reprochándole su incapacidad para dirigir el país.

Este periódico está acostumbrado a tener disputas con el poder. Uno de sus periodistas, Jean-Léonard Rugambage, pasó once meses en la cárcel de Gitarama con diversos pretextos todos ellos relacionados, de cerca o de lejos, con el genocidio de 1994. Le detuvieron en septiembre de 2005, diez días después de la publicación de un número de *Umuco* en el que denunciaba la corrupción de

algunos jueces de gacaca del distrito de Ruyumba, y la utilización de esos tribunales populares para arreglar cuentas personales. El 23 de noviembre le condenaron a un año de cárcel por "desacato al tribunal", tras dudar de la imparcialidad del presidente del tribunal encargado de juzgarle; y tenía pendiente una acusación de asesinato, que no se tenía en pie. Finalmente, los días 26 y 28 de julio de 2006 le declararon inocente de ambas acusaciones, y salió en libertad. Desde entonces vuelve a ocupar su puesto de redactor jefe de *Umuco*.

CONDENADO POR UN ANÁLISIS POLÍTICO

Otro periódico que ha padecido con frecuencia la cólera del poder es *Umuseso*, un semanario en kinyarwanda respetado por la ironía de sus análisis políticos. El 3 de agosto, el Alto Tribunal de la República ruandesa, la más alta jurisdicción del país, confirmó la condena por "desacato público" del director del semanario Charles Kabonero, a una pena de un año de cárcel, con la condena en suspenso, y multa de un millón de francos rwandeses (unos 1.450 euros), por publicar una serie de artículos críticos sobre el funcionamiento del gobierno. Al director de publicación de *Umuseso* le había denunciado Denis Polisi, vicepresidente del Parlamento y secretario general del FPR, que se refería a un artículo publicado en agosto de 2004 y titulado: "Entre Kagame y Polisi, ¿quién gobierna realmente?". Entre otras cosas, el artículo juzgaba el peso político de Denis Polisi a la luz de su posición de secretario general del partido en el poder, y antiguo miembro de la diáspora tutsi, refugiado en Burundi. Charles Kabonero revelaba también que Denis Polisi alquilaba oficinas a varias instituciones paraestatales, en un inmueble de su propiedad.

Por otra parte, Charles Kabonero fue objeto, en abril, de una violenta campaña de calumnias, entre otros en el bimensual progubernamental *Focus*. Sobre la base de un falso correo electrónico, el



RUANDA

periódico le acusó de haber conspirado con el teniente Abdul Ruzibiza, ex oficial de los servicios especiales del FPR hoy refugiado en el extranjero, con la intención de poner en marcha una oleada de atentados con bomba en Kigali, y derrocar el poder establecido.

SOMALIA

Superficie : 637.660 km².

Población : 8.228.000.

Idioma : somalí.

Jefe del Estado : Abdullahi Yusuf Ahmed.

La reanudación de hecho de la guerra hizo que 2006 fuera uno de los años más violentos para la prensa, desde hacía mucho tiempo. A un corresponsal extranjero le mataron en pleno día en Mogadiscio, mientras que una treintena de periodistas somalíes, molestos testigos de un conflicto hecho de mentiras y desinformación, fueron detenidos por uno u otro de los beligerantes.

Somalia, que al comienzo del año 2006 era un caótico archipiélago de señoríos, en el espacio de pocos meses se convirtió en el terreno de enfrentamiento entre un movimiento político-militar fundamentalista y un precario gobierno de transición. Por eso, los periodistas somalíes se encontraron frente a nuevos desafíos. Ya cuando el país estaba dividido en feudos de los señores de la guerra, protegidos por milicias de adolescentes mercenarios, eran los blancos preferidos por los poderosos, empresarios o autoproclamados gobernadores. En 2006, molestos testigos de una guerra en la que las mayores armas son la desinformación y la mentira, tuvieron que acomodarse por un lado con una Unión de Tribunales Islámicos (UTI) devota y nacionalista y, por otro, con un gobierno federal de transición, irritable y preocupado por su imagen en el panorama internacional.

REPETIDAS DETENCIONES

A lo largo del año, sobre la marcha detuvieron a una treintena de periodistas, a la vez en Mogadiscio (Sudeste), la base de la UTI, y en las regiones conquistadas por los tribunales islámicos, como Baidoa (Sudoeste), sede del gobierno, o en la región semi autónoma de Puntland (Noreste).

En la mañana del 24 de octubre, las milicias gubernamentales detuvieron, en el pueblo de Daynunay, a 15 km. de Baidoa, a Fahad Mohammed Abukar, periodista de *Radio Warsan*, Mohammed Adawe Adam, de *Radio Shabelle* y Muktar Mohammed Atosh, de la emisora *HornAfrik*. A los tres les cogieron en posesión de una cámara digital de video, que contenía imágenes del cadáver de un soldado etíope de origen somalí, muerto en Burhakaba, así como imágenes de tropas etíopes presentes en territorio somalí.

Estuvieron detenidos una semana, antes de que les dejaran en libertad. Nunca se difundieron las imágenes que habían grabado. Igualmente, Abdullahi Yasin Jama, periodista de *Radio Warsan*, cayó en una trampa tendida por las milicias del gobierno de transición en Baidoa, el 24 de noviembre. Detenido cuando acudía invitado a una falsa rueda de prensa, los milicianos retuvieron a la fuerza al periodista durante tres días, y le pegaron. Le castigaban por haber hablado de la "presencia masiva" de soldados etíopes en Somalia; algo que los gobiernos de Baidoa y Addis Abeba han dedicado la mitad del año a desmentir, sin conseguir convencer realmente.

El 29 de septiembre, las milicias de la UTI en Kismayo (Sudeste) detuvieron a tres periodistas de la emisora privada *HornAfrik*: Sahro Abdi Ahmed, Layla Sheik Ismail y Adam Mohammed Salad. Los tres quedaron en libertad a las pocas horas, tras recibir la orden de no volver a hablar de los tribunales islámicos. Por otra parte, el 17 de diciembre detuvieron en el aeropuerto de Mogadiscio al secretario general de la Unión Nacional de Periodistas Somalíes (NUSOJ), Omar Faruk Osman, y al coordinador de la organización, Alí Moalim Isak, antes de que embarcaran para un viaje de negocios. En principio les llevaron al puesto de policía del aeropuerto y después, con los ojos vendados, les trasladaron a la comisaría del distrito de Waberi. Incautaron el ordenador de Omar Faruk Osman, así como algunos documentos que llevaba, sus pasaportes y sus teléfonos móviles. Un policía acudió a interrogarles en la celda, y les obligó a revelar la contraseña para acceder a los e-mails del periodista. Les pusieron en libertad el mismo día, pero nunca les han devuelto sus pertenencias. Como consecuencia, y por temor a represalias, varios responsables de la NUSOJ emprendieron el camino del exilio.

SOMALIA

OBSTÁCULOS A LA NUSOJ

Del resto, la organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras en Somalia, pasó por muchos inconvenientes a lo largo del año, a medida que aumentaba su reputación de defensor de la libertad de prensa. Así, el 3 de julio, unos milicianos pagados por un rival expulsaron, amenazándola con las armas, a la dirección de la NUSOJ de sus oficinas de Mogadiscio, obligando a la organización a instalarse en otro lugar. En octubre, unas negociaciones con la dirección de la UTI les permitieron evitar que los religiosos impusieran un draconiano "código de conducta" a la prensa, prohibiendo entre otras cosas difundir informaciones "capaces de crear conflictos entre la población y los tribunales islámicos".

Porque el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo. El 4 de agosto cayó en una emboscada, tendida por tres hombres armados en la carretera de Baidoa a Mogadiscio, un coche que transportaba a algunos responsables de la NUSOJ; en el incidente mataron a su chofer, Madey Garas. Y dieciocho meses del asesinato, todavía impune, de Kate Peyton, enviada especial de la *BBC* a Mogadiscio, mataron a un periodista sueco en la capital, en pleno día, en el transcurso de una concentración de apoyo a los tribunales islámicos. Cuando el 23 de junio grababa a un grupo de manifestantes, a Martín Adler, reportero independiente acostumbrado a las zonas en conflicto, le mató un hombre encapuchado que le disparó una bala en el lado izquierdo del pecho. Los tribunales islámicos, que condenaron el asesinato, aseguraron haber efectuado varias detenciones, sin facilitar más detalles.

SUDÁN

Superficie : 2.505.810 km².

Población : 36.233.000.

Idiomas : árabe, inglés.

Jefe del Estado : Omar Hassan al-Bashir.

Los periodistas sudaneses son presa fácil para un gobierno que, para justificar la represión, usa y abusa de una legislación liberticida, de un nacionalismo teñido de religión y de un contexto regional revuelto. En 2006 detuvieron a una quincena de ellos, así como a dos reporteros extranjeros, molestos testigos de las masacres de Darfour.

Las masacres de Darfour son una llaga abierta para Sudán, una herida a la que el gobierno no soporta que nadie se acerque. Dos periodistas extranjeros y sus colaboradores pagaron en 2006 el precio de ese extremado nerviosismo, cuando les arrojaron a la cárcel por haberse interesado demasiado en el drama de esa inmensa región fronteriza con Tchad.

El fotógrafo y militante humanitario esloveno Tomo Kriznar, que por otra parte es consejero del presidente de su país, fue detenido el 19 de julio en el Norte de Darfour. El 14 de agosto, el tribunal penal de El Fasher, la capital del Estado, le condenó a dos años de cárcel. Le habían acusado de "espionaje", "publicación de noticias falsas" y "entrar en Sudán sin visado". En una entrevista que tuvo lugar el 1 de agosto, Tomo Kriznar reconoció haber entrado en Sudán sin visado desde la frontera tchadiana, invitado por el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM), pero rechazó la acusación de espionaje. La Embajada de Sudán en Viena (Austria) le había negado el visado, a causa de sus escritos, que consideraba "negativos". En efecto, había publicado varios artículos, en periódicos eslovenos y en su sitio de Internet, www.tomokrizar.com, sobre la situación en Darfour. Después de unas negociaciones, y de la intervención personal del presidente esloveno, a Tomo Kriznar le amnistió el Presidente, el 2 de septiembre.

Pocas semanas después del periodista esloveno, el 6 de agosto fue detenido por las fuerzas de seguridad gubernamentales, junto con sus colaboradores, el reportero norteamericano Paul Salopek, que realizaba un reportaje para el mensual privado estadounidense *National Geographic*. Disponía de dos pasaportes norteamericanos, una práctica frecuente entre los periodistas que cubren zonas de conflicto, y de fotografías tomadas por satélite de la región, disponibles en Internet. Inculpado de "espionaje" y "difusión ilegal de informaciones",

también le acusaron de haber entrado en territorio sudanés sin visado. Paul Salopek, que también es corresponsal del diario *Chicago Tribune*, junto con su intérprete Suleiman Abakar Moussa y su chofer Idriss Abdulraman Anu, estos dos últimos de nacionalidad tchadiana, no salieron en libertad hasta el 9 de septiembre, tras la obstinada intervención del gobernador del Estado de Nuevo México, Bill Richardson.

El error de ambos periodistas fue sobre todo haber ido, a pesar de todos los obstáculos administrativos y políticos, a cubrir una actualidad que el gobierno sudanés querría ocultar. Con los enviados especiales extranjeros, presentes en Darfour o en Jartum, se llevaron a cabo innumerables actos de intimidación, o amenazas apenas veladas.

PRESAS FÁCILES

Hay que decir que los periodistas sudaneses son una presa fácil para el poder. A lo largo del año 2006 detuvieron a más de quince, y eso a pesar de que en julio de 2005 desaparecieron oficialmente la censura y las leyes de excepción. A uno de ellos incluso le asesinaron salvajemente, traumatizando a una profesión que ya vivía con el temor de la represión gubernamental. En efecto, el 6 de septiembre la policía encontró, en una calle de un suburbio del sur de Jartum, el cuerpo decapitado de Mohamed Taha, redactor jefe del diario privado sudanés *Al-Wifaq*. La vispera por la noche varios hombres encapuchados secuestraron al periodista en su domicilio, situado en el este de la capital. Se lo llevaron, con destino desconocido, en un coche. La familia comunicó inmediatamente el secuestro a la policía.

A Mohamed Taha le habían juzgado en 2005 por "blasfemo", como consecuencia de la denuncia presentada por un grupo fundamentalista denominado Ansar al-Sunnah. El artículo inculpinado,

SUDÁN

escrito por este periodista que por otra parte era miembro del movimiento de los Hermanos Musulmanes, hacía referencia a un manuscrito islámico de hace cinco siglos que plantearía algunas dudas acerca de la genealogía del profeta. Tras la publicación del artículo, algunos imanes de Jartum organizaron importantes concentraciones, para exigir que se condenara a muerte al periodista. Su periódico estuvo suspendido durante dos meses.

Enseguida se dirigieron las sospechas hacia los islamistas radicales, y también hacia los rebeldes

de Darfour, de los que Mohamed Taha era un enemigo declarado. Abou Obeida Abdallah, periodista del diario privado *Al-Rai al-Aam*, permaneció detenido desde el 29 de septiembre hasta el 15 de octubre, oficialmente en el marco de la investigación sobre el asesinato de Mohamed Taha. Por otra parte había cubierto la cumbre que, en el mes de mayo, celebraron el gobierno y algunos grupos rebeldes de Darfour. No se filtró nada sobre su interrogatorio. Al terminar el año los investigadores no habían llegado a ninguna conclusión satisfactoria sobre el asesinato.



ZIMBABUE

*Superficie : 390.760 km².
Población : 13.010.000.
Idiomas : inglés, shona, ndebele.
Jefe del Estado : Robert Mugabe.*

El país, dirigido desde 1980 por el octogenario Robert Mugabe, es uno de los más feroces del continente con los periodistas. Vigilancia, amenazas, encarcelaciones, censura, chantaje, abusos de poder, denegación de justicia, todo es válido para controlar la información. Hasta el punto de que la justicia zimbabuense, cada vez más celosa de sus prerrogativas y cansada de que no la respeten, ha empezado a desautorizar al gobierno y sus agencias.

Manifiestamente, el control absoluto de la información, cueste lo que cueste, es una de las obsesiones del presidente zimbabuense Robert Mugabe. Desde 2002, y tras haber hecho que se aprobara una de las leyes más kafkianas del continente para reprimir a la prensa, se cerrara el diario más popular del país y se interfirieran las radios de la oposición, el gobierno zimbabuense no ha aflojado la presión contra las últimas voces independientes del país. Gracias al temible instrumento que es la Comisión de Medios de Comunicación e Información (MIC), en 2006 la represión alcanzó a los semanarios privados *Zimbabwe Independent* y *Financial Gazette (FinGaz)*, y a la radio privada *Voice of the People (VOP)*. Los servicios de inteligencia se encargaron de todas las demás formas de injusticia, sufridas por los periodistas zimbabuenses.

UN PULSO INTERMINABLE

De acuerdo con sus estatutos, la MIC, órgano de regulación de los medios de comunicación estrechamente controlado por el poder, procede cada año a reexaminar las licencias de los periódicos y las acreditaciones de los periodistas. Con el peligro de que eso sirva de chantaje. Y así, en la segunda semana de enero de 2006 la MIC amenazó con suspender la autorización de publicación de *FinGaz*, si el periódico no publicaba un desmentido del artículo aparecido la semana anterior, en el que se relataba como la Comisión, tras acceder a conceder una licencia al propietario del desaparecido diario *Daily News*, finalmente cedió a las presiones de los servicios de inteligencia y reconsideró su decisión. Igualmente, el 2 de febrero la MIC renovó finalmente las acreditaciones de los periodistas del *Zimbabwe Independent*, pero solo después de obligar al periódico a publicar el desmentido de un artículo aparecido el año anterior.

Evidentemente, la primera preocupación de la MIC, cuyo presidente vitalicio es Tafataona Mahoso, un antiguo compañero de viaje del jefe del Estado, es otra cosa distinta de la publicación de la verdad y la protección de los periodistas. Su postura es conocida. Por otra parte, incluso la justicia zimbabuense ha reconocido que la Comisión es incapaz e resolver algunos asuntos con equidad. Así, el 8 de febrero, el Alto Tribunal de Harare anuló la decisión de la MIC de negar una licencia de publicación a la editorial del *Daily News* y de su suplemento, el *Daily News on Sunday*, prohibido desde 2003. Los abogados de los periódicos recurrieron a la justicia, argumentando que el presidente de la MIC se había negado a declararse incompetente, a pesar de un mandato del Tribunal Supremo, de 2005, que le sentenció, por primera vez, de tomar partido. El juez del Alto Tribunal de Harare indicó que efectivamente la decisión de la MIC era sesgada, entre otras cosas por la influencia de los servicios de inteligencia, y que en consecuencia la Comisión tenía que volver a examinar la petición de licencia de los periódicos. Fortalecida por dos sentencias favorables, la editorial de los periódicos atacó el 28 de marzo al Ministro de Información y Publicidad, Tichaona Jokonya, ante el Alto Tribunal, con el fin de forzar que fuera el gobierno, en lugar de la MIC, descalificada, quien se pronunciara sobre la autorización de publicación. Pero, entre argucias jurídicas y violaciones de la ley, el gobierno zimbabuense hizo de todo para retrasar el momento en que se vería obligado a adoptar una decisión. Y, de hecho, todavía no ha tomado ninguna.

Por tanto, la MIC ha continuado vigilando tranquilamente y castigando las voces discordantes. "Peticiones de investigación" de tal o cual periodista, amenazas de retirada de licencia o acreditación, denuncias a la policía; esas son sus armas. Y



ZIMBABUE

así, en la semana del 3 de octubre la policía hizo irrupción en uno de los puntos de distribución del diario privado *The Zimbabwean*, en Harare. Los agentes de policías se llevaron una copia de la autorización de importación del periódico, así como algunos ejemplares de la semana anterior. El diario, uno de los últimos independientes que quedan en el país, se publica en el Reino Unido y se imprime en Sudáfrica, evitando así la draconiana legislación de la prensa privada, que la MIC custodia como una perra guardiana. La semana anterior el periódico había publicado un artículo, en el que algunas fuentes militares denunciaban casos de corrupción en la policía zimbabuense. Pocos días antes, el 1 de octubre, Tafataona Mahoso, pidió al Ministerio de Información que investigara al sindicato de los periodistas zimbabuenses (Zimbabwean Union of Journalists, ZUJ), estimando que animaba un "lobby anti Zimbabwe". Aseguraba que poseía documentos que daban cuenta de una petición de fondos, formulada por la ZUJ, a la Embajada de Holanda y a la UNESCO. En el mismo momento, Tafataona Mahoso presentó también una petición para que investigaran a Nunurai Jena, secretario de la ZUJ en la provincia de Mashonaland West, al que acusaba de trabajar en la radio pública norteamericana *Voice of America* (VOA), con sede en Washington, sin tener autorización de la MIC para hacerlo. El 28 de septiembre, finalmente la Comisión criticó violentamente la antena zimbabuense de la organización de defensa de la libertad de prensa Media Institute of Southern Africa (MISA-Zimbabwe) que, según dice, apoya "un cambio de régimen".

RESISTENCIA DE LA JUSTICIA

Pero la justicia zimbabuense resiste cada vez más los abusos de poder del gobierno. Así, el 25 de

septiembre, el presidente del tribunal de Harare decidió rechazar el tercer retraso del juicio de la radio privada *VOP*, solicitado por la acusación. "Esto se está convirtiendo en un circo", declaró, antes de decidir también dejar sin efecto las diligencias abiertas a los diez miembros del directorio de la emisora. Arnold Tsunga, Millie Phiri, Isabella Matambanadzo, Davis Masunda, Nhlanhla Ngwenya, Lawrence Chibwe y John Masuku, miembros del directorio, fueron detenidos en enero de 2006 con la excusa de que "poseían y utilizaban material de transmisión sin autorización". Maria Nyanyiwa, Takunda Chigwanda y Nyasha Bosha, empleados de la radio, estuvieron detenidos cuatro días, en diciembre de 2005, tras un registro de la policía en los locales de la emisora, en el centro de la capital. Todos quedaron en libertad con fianza.

Sobre la marcha, y cuando los recursos puramente legales no le bastan, el gobierno zimbabuense recurre al ejército, y entre otros a la poderosa Central Intelligence Organisation (CIO). Incapaz de conseguir detener a su personal, residente en el extranjero, a partir de la segunda quincena de junio el gobierno ordenó interferir la emisión de *Studio 7*, el programa de *VOA* destinado a Zimbabwe. Ahora se encuentra parasitada por un "ruido de chicharra", idéntico al que desde febrero de 2005 cubre la programación en onda corta de la emisora privada *SW Radio Africa*, con sede en Londres, y la de *VOA* emitida desde Ámsterdam, desde septiembre de 2005. Según las informaciones de Reporteros sin Fronteras, esas interferencias son posibles gracias a la presencia en Harare de expertos chinos, invitados para formar a sus homólogos zimbabuenses en telecomunicaciones y radiocomunicaciones, en el marco de los acuerdos de cooperación económica y técnica firmados entre ambos países.